

ESTADO, EMPLEO, EDUCACIÓN Y LA ARGENTINA POSIBLE



Por Rubén Torres

Al menos tres factores convergen en la situación social cuyo rostro trágico es la desigualdad: la desnaturalización del sistema democrático, la globalización económica y el efecto de la revolución tecnológica sobre el empleo. La pérdida de sustancia democrática no es nueva, alude a la transformación de democracias en plutocracias conformadas por élites que concentran poder y deciden sobre el destino de los ciudadanos, devenidos súbditos. Las transacciones entre aristocracias (nacionales e internacionales) definen políticas públicas, debilitan controles republicanos, reparten oportunidades entre pocos y facilitan la corrupción. La revolución tecnológica es la frutilla del postre. Un informe del World Economic Forum estimó que, debido a avances en genética, digitalización, inteligencia artificial e impresión 3D, se perderán a corto plazo 5 millones de puestos de trabajo. Este proceso al que llama “cuarta revolución industrial”, provocará “grandes perturbaciones en los modelos empresariales y en el mercado laboral durante los próximos 5 años”. La cuestión es

alarmante porque según E. Brynjolfsson y A. McAfee, la evolución tecnológica ha tomado velocidad en la etapa actual, por ellos bautizada: “Segunda era de las máquinas”.

Las capas medias y bajas de la población, con educación insuficiente para adaptarse a la transformación, temen ser reemplazadas por robots. Cuando los trabajos están desapareciendo rápidamente, la promesa de las competencias es la única esperanza para seguir inmersos “en la sociedad” y acceder a la movilidad social, sin la cual no habrá orden social.

En ese contexto, la Universidad deberá repensarse entendiendo que debe promover aprendizajes transdisciplinarios, estando dentro de la sociedad, que aprendizaje y trabajo son lo mismo, y eso requiere una educación disruptiva (*learning is the work*); aceptar que el “reconocimiento social” que aportaban certificaciones y títulos ya no son básicos para la sociedad y que debe ser más importante el papel en ella (a medida que el trabajo por turnos y las vidas vayan cambiando, los “diplomas de la universidad” ya no serán marcador de competencia y capacidad).

Como resultado de esta situación el déficit de las cuentas públicas se ensancha en la carrera para cubrir demandas de las que depende el

equilibrio socioeconómico del país. Pero no se llega porque con ingresos escasos, cuando se atiende una necesidad se desatiende otra: el dilema de la manta corta que los especialistas en presupuesto y macroeconomistas conocen bien.

Es muy difícil achicar el déficit fiscal pues el gasto público no puede reducirse sustancialmente. La mayor parte está compuesta por partidas intocables: remuneraciones a empleados públicos, jubilaciones y programas sociales. Las fuentes genuinas para agrandar la manta son limitadas: la presión tributaria directa está en un límite insostenible y la indirecta – como el IVA y otras imposiciones al consumo – sufre las restricciones de la recesión. Ese exceso de gasto que implica altos impuestos no se tradujo en mejores prestaciones en educación, salud, seguridad y justicia, a pesar de que los trabajadores estatales representan el 18% de la fuerza de trabajo ocupada del país.

Ese Estado gigantesco e ineficiente constituye una nueva clase social, cuerpo delirante y engordado por millones de personas de diverso nivel, que consiguieron posiciones inexpugnables cuando el gobierno no podía generar empleo genuino y enmascaraba esa impotencia tomando irresponsablemente agentes

públicos (entre 2012/16 fueron sumados 483.000 empleados públicos a los 3 niveles de gobierno -16,1% más de un plantel de 3 millones-, mientras que en el sector privado la creación de empleos registrados alcanzó a 120.000 - 2% de 6 millones). Por cada nuevo empleo privado se crearon cuatro empleos en el sector público, donde el gasto salarial representa 14% del presupuesto nacional y el 65% promedio en provincias y municipios agravando los problemas estructurales de sobredotación.

En ese colectivo, obra maestra de la desmesura, hay personas honestas y diligentes, pero también ñoquis burócratas, mafias y una rara cultura según la cual nadie tiene derecho a evaluar ni a exigir pericia, como si sus salarios no los pagaran los ciudadanos, y estuvieran más allá de cualquier análisis humano. Ese vasto cosmos se siente amenazado por un mundo que avanza hacia la robotización y una crisis del trabajo.

Tenemos un problema de empleo. Nuestros trabajadores son de calificación media y baja, hay desempleo encubierto en provincias e industrias protegidas, y estamos doblemente expuestos a la apertura comercial y tecnológica. La manita corta está también emparentada con un problema inconfesable que atañe a líderes empresarios, sindicales y funcionarios públicos; una maraña de intereses que condiciona la viabilidad económica del país resintiéndolo dos atributos necesarios del mundo competitivo: productividad y eficiencia.

El peaje que las elites argentinas se cobran unas a otras es una de las razones de la injusticia social y el

Ese Estado gigantesco e ineficiente constituye una nueva clase social, cuerpo delirante y engordado por millones de personas de diverso nivel, que consiguieron posiciones inexpugnables cuando el gobierno no podía generar empleo genuino y enmascaraba esa impotencia tomando irresponsablemente agentes públicos

subdesarrollo, y confirma que la falta de reglas de convivencia entre factores de poder atenta contra el desarrollo económico. La falta de legitimidad atribuida a las fuerzas políticas debe extenderse al resto de las elites, abocadas a un juego notoriamente destructivo.

¿Cómo imaginar una Argentina posible, distinta y mejor cuando prima la percepción de que quien hace las cosas mal o zafa política, económica e incluso moralmente? Tal vez la clave sea convencernos de que estamos para más, que esto de que el esfuerzo y la responsabilidad social se justifican porque el futuro no es una continuación de este presente es mejor; tanto, que a veces nos cuesta imaginarnos en él. En el futuro de la Argentina hay un perfil productivo posible en agroindustria, energía, turismo, manufacturas y servicios del conocimiento (informática, diseño, contenidos, educación, salud y cuidados), que generan riqueza, divisas, empleo o una combinación de los tres. Hay un Estado posible que, además de paliar la pobreza, provea bienes y servicios públicos que impulsen la movilidad ascendente, proteja empresas sensibles e incluya nuevas mo-

dalidades laborales siguiendo el ejemplo de los países más productivos y equitativos del mundo.

Hay una sociedad posible, sin prejuicios ni grietas, que entienda que el Estado somos todos, y pase de la indiferencia a la sanción social de comportamientos antisociales como la corrupción o la evasión. Esta Argentina no está a la vuelta de la próxima elección, sino al final de 20 años de reformas y batallas políticas, de diálogo y acuerdos. El Congreso Nacional debería ser el ámbito de este debate, aunque su vocación de austeridad es dudosa: cada diputado o senador es una suerte de pyme, con promedio de 35 empleados entre secretarías, choferes y asesores; varias provincias sostienen parlamentos bicamerales; un acuerdo para votar el Presupuesto asignó varios millones a una provincia para cubrir el déficit de su caja, que paga jubilaciones de privilegio de hasta \$ 220.000 mensuales a jueces y legisladores retirados, mientras el Poder Judicial resiste pagar impuesto a las ganancias: el actual gobierno, elevó el número de ministerios de 17 a 23, el de secretarías de 65 a 80 y el de subsecretarías, de 167 a 196.

Esta Argentina será posible si nos convencemos de que es posible un país mejor que el que hoy creemos tener. Hoy sería imposible disminuir el aparato estatal, pero habrá que analizar seriamente cuál debería ser su dimensión deseable, para lograr equilibrio entre gobernabilidad, desarrollo y equidad.

La Universidad debe jugar un papel en esto y abandonar el pragmatismo. El conformismo (disfrazado de pragmatismo) es la derrota de la política. 